



Sr. Pérez Solano, Presidente en funciones y Ponente

Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Madrid López, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 2 de agosto de 2007, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 25 de junio de 2007 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, debido a los daños ocasionados en su vehículo al haber sido golpeado por un contenedor de basura.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 3 de julio de 2007 se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 618/2007, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el Sr. Presidente en funciones del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Pérez Solano.

Primero.- Con fecha 16 de febrero de 2007 se persona el reclamante ante la Policía Local de xxxxx, y realiza una denuncia relativa a un golpe recibido en su furgoneta por un contenedor.

En el "parte de incidencias" realizado como consecuencia, consta el siguiente informe:



“A las 16,05 horas del día de la fecha se persona el implicado en estas dependencias, comunicando que un contenedor de los de la basura, se ha desplazado como consecuencia del viento, y ha golpeado a su vehículo causándole daños en el piloto trasero derecho.

»Se personan los Agentes firmantes en el lugar observando como hay un contenedor verde totalmente pegado a su vehículo y como el piloto trasero derecho presenta un pequeño golpe y su rotura.

»Datos Vehículo: xxxx xxxx

»Se realizan fotografías que se adjuntan y se le indica que deberá formular denuncia ante esta Policía Local para presentarlo a su seguro y reclamar los daños”.

El lugar donde se producen los daños está situado en la Avenida de xxxx frente al cruce con la C/ xxxx.

Consta en el expediente administrativo el acta de denuncia realizada ante la Policía Local de xxxxx por el reclamante en la misma fecha, así como diversas fotografías.

Segundo.- Por resolución de la Alcaldía de xxxxx de 16 de marzo de 2007, se admite de oficio la reclamación, nombrado instructor del procedimiento.

Tercero.- El día 26 de abril de 2007 el capataz del servicio de limpieza del Ayuntamiento, D. ggggg, informa en relación al estado en que se encuentra contenedor: “Que dicho contenedor carece de horquillas o cualquier otro tipo de sujeción, que impida su desplazamiento”.

Cuarto.- En fecha 16 de marzo de 2007 se realiza el preceptivo trámite de audiencia, sin que conste en el expediente administrativo constancia alguna de alegaciones.

Quinto.- El día 1 de junio de 2007 se formula propuesta de resolución estimatoria de la reclamación presentada.



En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado h), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Únicamente cabe indicar que el expediente ha de ser foliado debidamente.

3ª.- La Administración ha dado por acreditados los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. No obstante, hay que advertir que no hay constancia en el expediente administrativo de documento alguno que acredite la titularidad del vehículo.

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los



casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002) y de este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 1008/2005, de 1 de diciembre; 1134/2005, de 12 de enero de 2006; 59/2006, de 19 de enero; y 300/2006, de 23 de marzo), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.



f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxx, debido a los daños ocasionados en un vehículo, presuntamente de su propiedad, al haber sido golpeado por un contenedor de basura.

La parte interesada ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la esfera de las Administraciones Locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que “las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”. En línea con esto, el artículo 223 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que “las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”.

Por su parte, es preciso poner en relación el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, anteriormente citada, que declara que son servicios públicos locales cuantos tiendan a la consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades locales, con el artículo 25.2.1) de dicha norma, que declara que el municipio ejercerá en todo caso competencia en lo relativo a servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos.

Siendo por lo tanto de titularidad municipal el contenedor de basuras que provocó el daño en el vehículo propiedad del reclamante, procede determinar si



concurrir el resto de los requisitos legalmente exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial administrativa. Interesa en concreto determinar si se da o no la relación de causa a efecto ya referida entre el hecho imputado a la Administración y los daños y perjuicios reclamados.

En el expediente administrativo, producto de una insuficiente instrucción, no se ha determinado por qué motivo se pudo poner en movimiento el contenedor, si fue a consecuencia del viento, o empujado por otro vehículo aparcado, o se produjo por una manipulación excesivamente violenta realizada por los servicios de limpieza.

La carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probando incumbit actori* y con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Administración, por su parte, debería haber probado los hechos que, en su caso, desvirtúen los alegados, y no ha realizado esfuerzo probatorio alguno, por lo que debe estimarse la reclamación presentada.

El importe de la indemnización deberá fijarse en expediente contradictorio, debiendo exigirse previamente al interesado que acredite la titularidad de la furgoneta y la evaluación del daño.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados en su vehículo al haber sido golpeado por un contenedor de basura.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.